Proyecto de Ley N° 10191/2024-CR

PAUL SILVIO GUTIERREZ TICONA
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA

CONGRESO de la REPÚBLICA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho "

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
12 FEB. 2025
RECIBIDO
Firma: Hora: 10:19 am

SUMILLA: LEY QUE FORTALECE LA DENUNCIA CIUDADANA Y PROTEGE LA IDENTIDAD DE LOS INFORMANTES EN CASOS DE CRIMEN ORGANIZADO.

Los Congresistas de la República que suscriben a iniciativa del congresista **Paul Silvio Gutiérrez Ticona**, miembro del grupo parlamentario "Bloque Magisterial de Concertación Nacional", en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107° de la Constitución Política del Estado y de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 22° y los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la iniciativa legislativa siguiente:

LEY QUE FORTALECE LA DENUNCIA CIUDADANA Y PROTEGE LA IDENTIDAD DE LOS INFORMANTES EN CASOS DE CRIMEN ORGANIZADO

Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto establecer un régimen integral que incentive la denuncia ciudadana contra ciudadanos que tenga en su posesión, comercialización de armas de fuego, explosivos y actividades vinculadas a organizaciones criminales en casos de flagrancia en los delitos comprendidos en la Ley 30077. Así mismo se busca, fortalecer recompensas económicas y la exención de pena privativa de libertad para los ciudadanos informantes o colaboradores que fueron o son parte de la organización criminal que no hayan cometido delitos graves, y así promover la cooperación ciudadana en la lucha contra el crimen organizado, garantizando la protección de la identidad de quienes aporten información relevante.

Artículo 2.- Finalidad de la Ley
La finalidad de esta iniciativa legislativa es fortalecer el sistema de justicia penal y contribuir a la seguridad pública, facilitando la desarticulación de organizaciones criminales a través de la colaboración ciudadana. Al incentivar la denuncia y proteger la identidad de los informantes, se busca crear un entorno seguro que fomente la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia organizada, reduciendo así el impacto de estos delitos en la sociedad.

Artículo 3.- Incentivos económicos para los informantes
El Estado otorga recompensa económica a toda persona que, de manera voluntaria, proporcione información veraz y comprobable que conduzca a la detención de personas involucradas en la posesión o comercialización ilegal de armas de fuego, explosivos, o en la identificación de cabecillas o miembros de organizaciones criminales y en los delitos comprendidos en la Ley 30077 solo en los casos de flagrancia. El monto de la recompensa será determinado por el Ministerio del Interior, en función de la relevancia y el impacto de la información.

Artículo 4.- Exoneración de responsabilidad penal para colaboradores
Los ciudadanos que hayan participado en actividades delictivas relacionadas con la posesión o comercialización ilegal de armas o explosivos, y que proporcionen información clave que permita

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

la captura de responsables o la desarticulación de redes criminales, quedarán exentos de pena privativa de libertad, siempre que:

1. La información proporcionada sea veraz y relevante.
2. La colaboración se realice de manera voluntaria y antes de que se inicie un proceso penal o inicio de investigación preliminar en su contra cuando hayan sido autores o coautores de los delitos señalados en la presente ley.

Artículo 5.- Protección de la identidad del informante

El Estado garantizará la protección de la identidad de los ciudadanos que brinden información sobre actividades criminales. Se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar su anonimato y protegerlos de cualquier tipo de represalia. La protección se mantendrá durante y después del proceso investigativo y judicial, pudiendo incluir programas de protección a testigos y medidas adicionales de seguridad.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

PRIMERA.- Autoridades competentes

El Ministerio del Interior y el Ministerio Público serán las entidades encargadas de implementar los mecanismos necesarios para la recepción, verificación y tratamiento de la información proporcionada por los ciudadanos. Asimismo, son responsables de la asignación de recompensas y la protección de la identidad de los informantes, garantizando la confidencialidad y el manejo adecuado de la información.

SEGUNDA.- Implementación y reglamentación

El Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de 60 días calendario. En este reglamento se establecerán los procedimientos para la denuncia, los criterios para la asignación de recompensas y las medidas de protección de la identidad del informante.

TERCERA.- Vigencia de la Norma

La presente Ley, entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Lima, 11 de Febrero de 2025

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUIROZ BARBOZA Segundo Teodomiro FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/02/2025 13:49:23-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GUTIERREZ TICONA Paul Silvio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/02/2025 12:53:23-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: QUIROZ BARBOZA Segundo Teodomiro FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 11/02/2025 13:49:34-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MEDINA HERMOSILLA Elizabeth Sara FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/02/2025 15:38:10-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: UGARTE MAMANI Jhakeline Katy FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/02/2025 17:23:16-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TACURI VALDIVIA German Adolfo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/02/2025 16:58:06-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VASQUEZ VELA Eunice Rocio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11/02/2025 17:25:24-0500

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Telfs: (51) 311 7777 Anexo 7284

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.- INTRODUCCION Y MARCO NORMATIVO

En la presente iniciativa legislativa se enfoca en incentivar la colaboración ciudadana para combatir el crimen organizado mediante la denuncia de armas, explosivos y otras actividades ilícitas. A través de recompensas y medidas de protección, se busca fomentar la participación de los ciudadanos en la identificación de elementos clave que permitan a las autoridades actuar de manera preventiva y reactiva en la lucha contra el crimen organizado. Al ofrecer exoneración de penas para quienes brinden información veraz de forma voluntaria, para aquellos que hayan incurrido en delitos graves siendo parte de la organización criminal, la iniciativa legislativa pretende disuadir la participación en actividades ilícitas y alentar la denuncia temprana.

La propuesta de ley introduce un sistema de incentivos y protección que opera en tres ejes principales: el fomento de denuncias, la protección de la identidad de los informantes, y la exoneración de penas para colaboradores que participaron o son miembros de la organización criminal. Este enfoque no solo busca fortalecer las capacidades del Estado en la prevención y persecución del crimen organizado, sino también establecer una colaboración estratégica con la ciudadanía.

El incentivo de denuncia, en el contexto del crimen organizado, la denuncia ciudadana es un recurso esencial, pero de difícil obtención debido a los riesgos de represalia y la complejidad de estas estructuras criminales. La presente propuesta de ley pretende superar este obstáculo mediante un sistema de recompensas, cuya cuantía será determinada según el valor y precisión de la información proporcionada. Desde una perspectiva penal, la recompensa cumple un rol doble: primero, como incentivo que genera beneficios tangibles y, segundo, como mecanismo disuasivo al reducir el "costo" personal de colaborar con las autoridades. Sin embargo, es crucial que el Ministerio del Interior establezca criterios claros y objetivos para la asignación de estas recompensas, evitando arbitrariedades que puedan menoscabar la eficacia del sistema y la confianza pública en el proceso.

El anonimato y la seguridad de los informantes es uno de los pilares fundamentales de esta propuesta legislativa, especialmente en un contexto en el cual el crimen organizado puede actuar en represalia. La normativa vigente, así como estándares internacionales, como la Convención de Palermo, abogan por medidas que protejan tanto la identidad como la integridad física de los colaboradores. Esta iniciativa legislativa proyecta el compromiso del Estado en este sentido, ya que establece que la identidad de los informantes será confidencial y su protección estará garantizada por el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. Estas instituciones deberán coordinar para implementar tecnologías y métodos de ocultación de datos y crear procedimientos que eviten cualquier filtración de identidad que pueda poner en riesgo al informante y a su entorno familiar.

La exoneración de penas es un aspecto innovador de la propuesta legislativa que se encuadra dentro del derecho penal premial, el cual permite que ciertos beneficios penales (reducción o exoneración de condena) se ofrezcan a aquellos que colaboren efectivamente

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

en la resolución de crímenes para aquellos que son miembros de la organización criminal, y que la información sea veraz y efectiva. Este beneficio es exclusivamente aplicable a quienes, antes de ser procesados y sin haber cometido delitos graves, aporten información veraz y útil. Este enfoque penal premial responde a una estrategia de justicia restaurativa que no solo permite a los participantes desvincularse de actividades ilícitas, sino que también aporta beneficios sustanciales a la justicia penal al facilitar la desarticulación de redes criminales desde adentro.

Bajo la normativa propuesta en el presente proyecto de ley, el Ministerio del Interior y el Ministerio Público no solo asumen la tarea de gestionar las denuncias, sino también de establecer protocolos de protección y definir los criterios de recompensas. La exigencia de reglamentación en un plazo de 60 días pone énfasis en la urgencia de contar con directrices claras para la aplicación de la ley, de modo que no solo se garantice la seguridad de los informantes, sino que también se eviten abusos o malentendidos en la implementación de las recompensas y la exoneración penal. La iniciativa legislativa también demanda coordinación interinstitucional, aspecto clave para enfrentar la complejidad del crimen organizado de manera efectiva.

El presente proyecto de ley constituye una herramienta estratégica para combatir el crimen organizado al integrar incentivos, protección, y beneficios penales para informantes ciudadanos en casos de flagrancia. Sin embargo, su eficacia dependerá de la implementación adecuada de los mecanismos de protección y de criterios objetivos en la asignación de recompensas y la exoneración de penas. La coordinación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público será fundamental para consolidar una estructura confiable y efectiva, que motive la colaboración ciudadana y refuerce las capacidades del Estado frente al crimen organizado, y en el presente caso en discusión tiene como objetivo principal fortalecer el combate contra el crimen organizado, incentivando la participación ciudadana en la denuncia de actividades ilícitas relacionadas con armas, explosivos y otros elementos de riesgo. A través de un sistema de recompensas y medidas de protección, se busca que los ciudadanos brinden información veraz y oportuna que permita a las autoridades desarticular redes criminales. Además, se establece la posibilidad de exoneración de penas para aquellos informantes que colaboren voluntariamente aquellos que son parte de dicha organización y que no hayan cometido delitos graves, promoviendo así una forma de justicia premial que permite al Estado alinear sus intereses de seguridad pública con incentivos legales para colaboradores dispuestos a romper el silencio.

La propuesta legislativa se encuentra dentro del marco de nuestra Constitución Política del Perú, que en su artículo 44 establece el deber del Estado de *"proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general"*, Este mandato constitucional da soporte al desarrollo de políticas de protección y fomento de la denuncia ciudadana como instrumentos válidos en la lucha contra el crimen. A nivel internacional, la Convención de Palermo, ratificada por Perú, legitima la implementación de técnicas especiales de investigación para enfrentar el crimen organizado, en la medida que las autoridades puedan aplicar mecanismos que garanticen la seguridad y confidencialidad de los informantes.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

La propuesta legislativa dispone al Ministerio del Interior y al Ministerio Público como responsables de gestionar tanto ia protección de los informantes como la asignación de recompensas. La participación de estas entidades resulta fundamental, ya que el marco de protección debe cumplir con principios de confidencialidad, especialidad y necesidad, garantizando que la identidad de los colaboradores sea preservada en todo momento y que la información suministrada sea utilizada exclusivamente para combatir el crimen. De esta forma, se asegura la colaboración efectiva y evita que los ciudadanos se expongan a represalias por participar en la justicia penal.

Por otra parte, la exoneración de penas es una herramienta dentro del derecho penal premial que fomenta la cooperación de individuos relacionados de manera indirecta con el crimen organizado, permitiéndoles proporcionar información útil y veraz antes de ser procesados, siempre que no hayan cometido delitos graves. Este enfoque se sostiene en el artículo 341 del Código Procesal Penal, el cual habilita el beneficio procesal a cambio de la colaboración efectiva del informante. Este mecanismo de exoneración no solo facilita la obtención de pruebas críticas, sino que también contribuye a desmantelar redes delictivas, al permitir que individuos con conocimiento de primera mano sobre las estructuras criminales puedan colaborar sin temor a represalias legales.

Por otra parte, el proyecto de ley que incentiva la denuncia ciudadana en casos de ciudadanos que tengan en su poder armas, explosivos y actividades ligadas al crimen organizado se apoya en principios y técnicas avanzadas de derecho penal y criminalística, orientadas a facilitar la desarticulación de redes delictivas. Es así, la presente propuesta legislativa se sitúa dentro del marco del derecho penal premial, una estrategia que premia la colaboración de individuos involucrados marginalmente en redes criminales. Esta iniciativa legislativa reconoce que, para penetrar estructuras criminales complejas y herméticas, resulta crucial contar con informantes que puedan brindar información detallada y verídica. Este tipo de enfoque ha sido respaldado tanto por normas nacionales como internacionales, y su eficacia ha sido demostrada en experiencias comparadas. En la Convención de Palermo, por ejemplo, se reconoce la validez de medidas como la protección de identidad y la colaboración premiada como mecanismos que facilitan la recolección de pruebas de alta calidad, especialmente cuando los delitos involucran a múltiples personas o estructuras jerárquicas dentro del crimen organizado.

El incentivo mediante exoneración de penas establece una distinción clave en esta iniciativa legislativa: solo aquellos que colaboren antes de ser procesados y que no hayan cometido delitos graves podrán beneficiarse. Esto no solo limita el alcance de la colaboración premiada, sino que también establece un balance entre la protección del interés público y la necesidad de justicia. En términos de derecho penal, la iniciativa legislativa aborda dos áreas centrales: la coacción psicológica, reduciendo el miedo a represalias mediante medidas de protección, y la justicia restaurativa, al permitir que individuos contribuyan activamente a la desarticulación del crimen a cambio de beneficios procesales.

Desde el punto de vista criminalístico, la denuncia incentivada y protegida proporciona acceso a información interna de alto valor. La criminalística, enfocada en la recolección, análisis y preservación de pruebas, considera a los informantes como fuentes primarias y

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

confiables cuando su información proviene de observaciones directas o de la participación en actividades criminales. Las técnicas de investigación especializadas, como las operaciones encubiertas, requieren el respaldo de pruebas directas o indirectas que solo pueden ser obtenidas por personas dentro o cercanas a la organización delictiva. En este sentido, los informantes protegidos se convierten en actores clave para validar hipótesis de investigación y ubicar con precisión a los integrantes y operaciones de la red criminal, lo que facilita la aplicación de intervenciones coordinadas y precisas.

La presente propuesta de ley también facilita la implementación de técnicas como la vigilancia electrónica y la interceptación de comunicaciones, siempre dentro del marco legal y con autorización judicial. La información proporcionada por los informantes permitirá a las autoridades orientar estas técnicas hacia los líderes y nodos estratégicos de las redes criminales, mejorando la eficiencia de los recursos y garantizando que las pruebas recolectadas sean válidas y admisibles en un proceso penal. El empleo de operaciones de inteligencia, como la figura del "agente encubierto", permite además reforzar la información proporcionada por el informante y, en conjunto, crear un caso sólido en el que cada pieza de evidencia complementa y fortalece las otras.

La propuesta legislativa asigna al Ministerio del Interior y al Ministerio Público la responsabilidad de garantizar la seguridad y anonimato de los informantes, una medida que es clave para motivar la colaboración en casos de crimen organizado. La implementación de un protocolo de protección no solo incluye la reserva de identidad, sino también medidas de seguridad específicas para proteger a los familiares y personas cercanas al informante, en coherencia con los lineamientos de la Convención de Palermo. Este enfoque integral de protección es esencial en criminalística, ya que la conservación de la integridad física y psicológica de los informantes asegura que la información proporcionada no esté influenciada por amenazas o coacción, manteniendo así su autenticidad y valor probatorio en el proceso judicial.

Así mismo, el proyecto de ley permite la exoneración de penas únicamente a aquellos que colaboren antes de ser procesados y que no hayan cometido delitos graves. Desde la perspectiva del derecho penal y la criminalística, esta medida representa un incentivo valioso que permite que miembros de las redes criminales, quienes conocen sus estructuras internas, accedan a una salida segura del mundo delictivo a cambio de información veraz y útil. Esta figura de colaboración premiada se alinea con las técnicas de "criminalidad organizada" previstas en la Ley 30077, en las cuales el Estado puede emplear beneficios procesales para obtener información que de otro modo sería inaccesible, pero crucial para la identificación y aprehensión de líderes y financistas de estas redes.

Conforme se advierte el crimen organizado en Perú representa un desafío complejo y de gran magnitud, caracterizado por la infiltración en la economía y la sociedad a través de redes criminales que explotan la escasa regulación y la debilidad institucional. Estas organizaciones se valen de técnicas sofisticadas, como se señala en estudios de criminalidad organizada, para consolidar su poder y extender sus actividades, entre las que destacan el tráfico de armas y explosivos, actividades directamente relacionadas con el proyecto de ley que incentiva la denuncia ciudadana.

La propuesta de ley busca enfrentar este fenómeno proporcionando incentivos y protecciones a ciudadanos dispuestos a colaborar en la lucha contra el crimen organizado.

- **ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO**
  - Constitución Política del Perú
  - Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado: Establece las bases para el combate contra las organizaciones criminales y permite la aplicación de técnicas especiales de investigación.

  - Convención de Palermo y Normas Internacionales: Perú es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que promueve políticas de cooperación y la implementación de medidas para garantizar la seguridad de quienes colaboren con las autoridades.

II.- FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley que se presenta, tiene como objetivo establecer un régimen integral que incentive la denuncia ciudadana sobre la posesión, comercialización o conocimiento de armas de fuego, explosivos y actividades vinculadas a organizaciones criminales. Se busca, mediante recompensas económicas y la exoneración de penas privativas de libertad para los informantes colaboradores, promover la cooperación ciudadana en la lucha contra el crimen organizado, garantizando la protección de la identidad de quienes aporten información relevante.

El Informe Estadístico sobre Seguridad Ciudadana, detallado en el Informe N° 03 de mayo de 2024 y correspondiente al período de noviembre de 2023 a abril de 2024, destaca que desde 2010 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha estado implementando la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, anteriormente conocida como Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, dentro del programa de Presupuesto por Resultados.

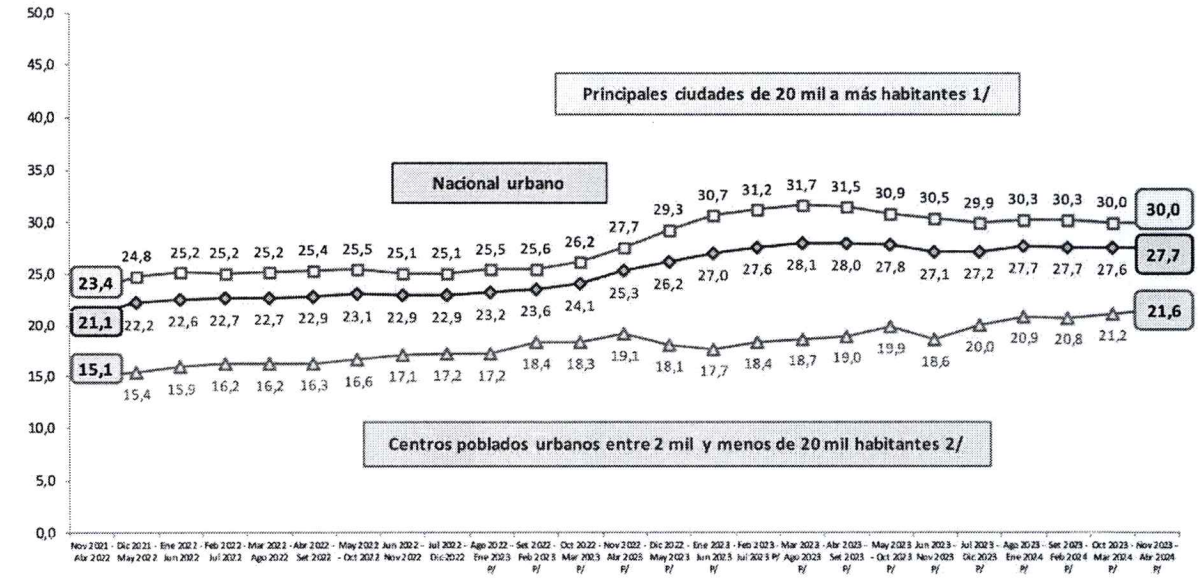
Esta encuesta aborda temas clave, entre ellos la "Seguridad Ciudadana," cuyo propósito es recopilar información esencial sobre la victimización de personas de 15 años y más en el último año, así como evaluar la percepción de inseguridad de los ciudadanos y la disponibilidad de servicios de vigilancia en sus comunidades o barrios.

El módulo de "Seguridad Ciudadana" abarca el área urbana a nivel nacional, con una muestra anual de 28,000 viviendas particulares. Los resultados cubren centros poblados urbanos con una población de 2,000 habitantes o más, organizados de la siguiente manera:

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN URBANA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, POR ÁMBITO DE ESTUDIO

Semestre: Noviembre 2021 – Abril 2022 / Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

Población Urbana Afectada por Delitos

Se define como "víctima" a cualquier persona de 15 años o más en áreas urbanas que haya experimentado al menos un delito durante el periodo de referencia (últimos 12 meses). Estos hechos delictivos son aquellos que comprometen la seguridad personal, vulneran derechos individuales y generan situaciones de riesgo, daño o peligro.

A nivel nacional urbano, el 27.7% de la población de 15 años o más ha sido víctima de algún tipo de delito. Esta cifra representa un incremento de 6.6 puntos porcentuales en comparación con el periodo de noviembre 2021 – abril 2022 y de 2.4 puntos en relación al semestre de noviembre 2022 – abril 2023.

En las principales ciudades con 20,000 o más habitantes, el 30.0% de la población ha sido afectada por algún hecho delictivo. En contraste, en centros urbanos más pequeños, con entre 2,000 y menos de 20,000 habitantes, la cifra de victimización fue del 21.6%.

Estos hechos delictivos incluyen: robo o intento de robo de dinero, cartera o celular; robo o intento de robo de vehículos, que abarcan automóviles, camionetas, autopartes, mototaxis, motocicletas o bicicletas; amenazas, intimidaciones, maltratos físicos o psicológicos dentro del hogar, agresiones sexuales, secuestros o intentos de secuestro, extorsión, estafa, robo de negocios y delitos cibernéticos.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN URBANA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD VICTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, POR ÁMBITO DE ESTUDIO

Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)

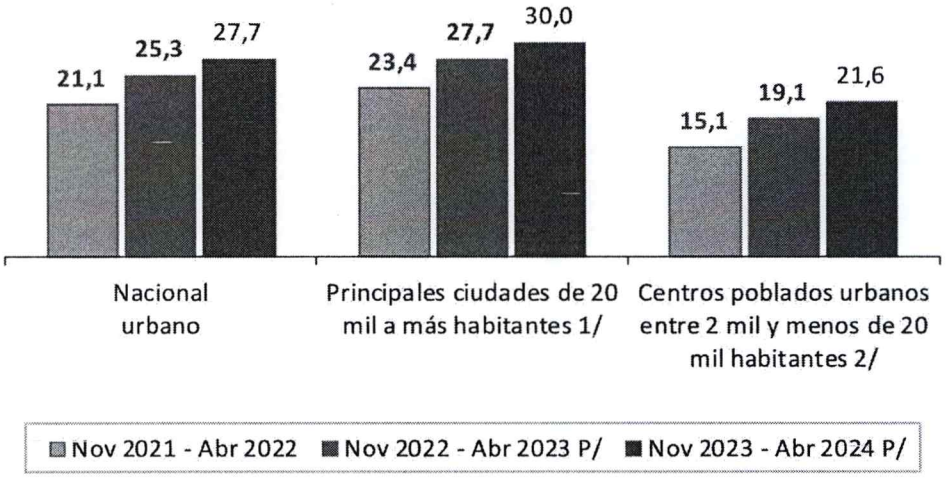
Semestre móvil	Nacional urbano	Principales ciudades de 20 mil a más habitantes 1/	Centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes 2/		
			Total	Ciudades no priorizadas con más de 20 mil habitantes	Centros poblados urbanos 3/
Nov 2021 - Abr 2022	21,1	23,4	15,1	15,9	14,2
Dic 2021 - May 2022	22,2	24,8	15,4	16,5	14,1
Ene 2022 - Jun 2022	22,6	25,2	15,9	17,0	14,7
Feb 2022 - Jul 2022	22,7	25,2	16,2	17,1	15,2
Mar 2022 - Ago 2022	22,7	25,2	16,2	17,1	15,3
Abr 2022 - Set 2022	22,9	25,4	16,3	17,0	15,7
May 2022 - Oct 2022	23,1	25,5	16,6	17,2	16,1
Jun 2022 - Nov 2022	22,9	25,1	17,1	17,4	16,9
Jul 2022 - Dic 2022	22,9	25,1	17,2	17,4	17,1
Ago 2022 - Ene 2023 P/	23,2	25,5	17,2	17,5	16,8
Set 2022 - Feb 2023 P/	23,6	25,6	18,4	18,9	17,8
Oct 2022 - Mar 2023 P/	24,1	26,2	18,3	18,9	17,7
Nov 2022 - Abr 2023 P/	25,3	27,7	19,1	19,3	18,9
Dic 2022 - May 2023 P/	26,2	29,3	18,1	18,8	16,9
Ene 2023 - Jun 2023 P/	27,0	30,7	17,7	18,0	17,2
Feb 2023 - Jul 2023 P/	27,6	31,2	18,4	19,1	17,1
Mar 2023 - Ago 2023 P/	28,1	31,7	18,7	19,9	17,3
Abr 2023 - Set 2023 P/	28,0	31,5	19,0	20,2	17,5
May 2023 - Oct 2023 P/	27,8	30,9	19,9	21,5	18,5
Jun 2023 - Nov 2023 P/	27,1	30,5	18,6	19,6	17,4
Jul 2023 - Dic 2023 P/	27,2	29,9	20,0	21,5	18,5
Ago 2023 - Ene 2024 P/	27,7	30,3	20,9	22,3	19,6
Set 2023 - Feb 2024 P/	27,7	30,3	20,8	21,6	19,9
Oct 2023 - Mar 2024 P/	27,6	30,0	21,2	21,9	20,4
Nov 2023 - Abr 2024 P/	27,7	30,0	21,6	22,4	20,7
Diferencia con semestre móvil Nov 2021 – Abr 2022 (puntos porcentuales)					
Nov 2021 - Abr 2022/					
Nov 2023 - Abr 2024 P/	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5
Diferencia con semestre móvil Nov 2022 – Abr 2023 (puntos porcentuales)					
Nov 2022 - Abr 2023 P/					
Nov 2023 - Abr 2024 P/	2,4	2,3	2,5	3,1	1,8

1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
3/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN URBANA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD VICTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, POR ÁMBITO DE ESTUDIO

Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)

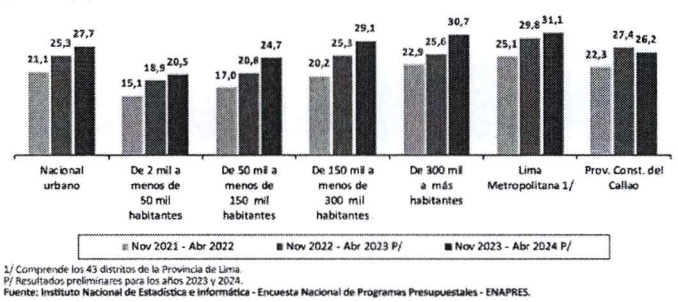


1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

La tasa de victimización varía según el tamaño del centro urbano. En aquellos con mayor densidad poblacional, la proporción de personas afectadas por delitos es más alta que en los centros urbanos más pequeños. Durante el periodo analizado, el 31.1% de la población de 15 años o más en Lima Metropolitana fue víctima de algún delito. En centros urbanos con 300,000 o más habitantes, esta cifra fue del 30.7%. En los centros de entre 150,000 y 300,000 habitantes, así como en la Provincia Constitucional del Callao, la incidencia fue del 29.1% y 26.2%, respectivamente. Por su parte, en los centros urbanos con poblaciones menores (de 2,000 a menos de 50,000 habitantes), el 20.5% de la población reportó ser víctima de algún hecho delictivo.

POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, POR TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS URBANOS

Periodo: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



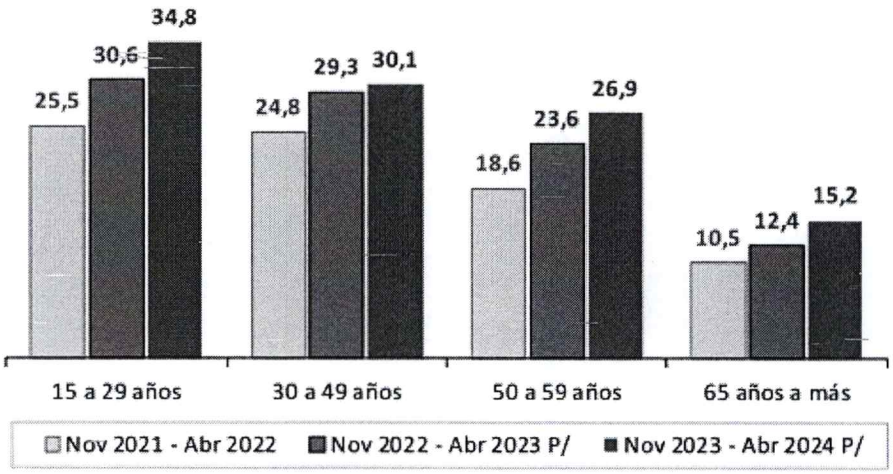
1/ Comprende los 43 distritos de la Provincia de Lima.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

A nivel urbano nacional, el grupo de edad con el mayor porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo corresponde a personas entre 15 y 29 años (34,8%), seguido por aquellos de entre 30 y 49 años (30,1%) y luego el grupo de 50 a 59 años (26,9%). El porcentaje más bajo de víctimas se encuentra entre las personas de 60 años o más, con un 15,2%.

En comparación con el mismo periodo del semestre móvil anterior, de noviembre 2022 a abril 2023, todos los grupos etarios registraron un aumento en la victimización. El incremento más notable se dio entre los jóvenes de 15 a 29 años, que aumentaron en 4,2 puntos porcentuales, pasando de 30,6% a 34,8%.

POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, POR GRUPOS DE EDAD

Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



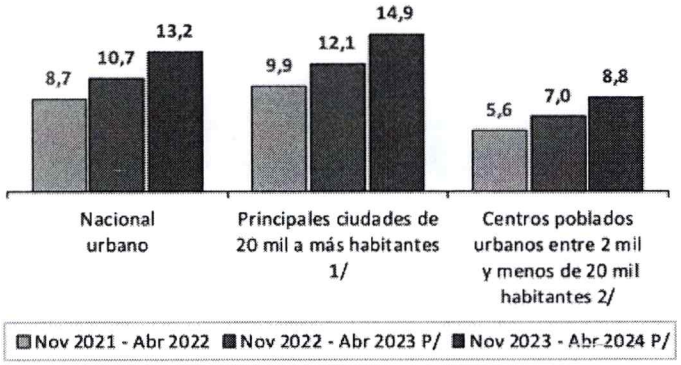
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

La "victimización múltiple" se refiere a los casos en que una persona ha sufrido dos o más delitos en los últimos 12 meses previos a la entrevista. A nivel nacional, el 13,2% de la población urbana de 15 años o más fue víctima de más de un delito. Esto representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales respecto al semestre móvil de noviembre 2022 a abril 2023.

En las principales ciudades con una población de 20 mil habitantes o más, el 14,9% de las personas fueron víctimas en más de una ocasión, mientras que en centros poblados urbanos de entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, este porcentaje fue del 8,8%.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN URBANA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD VÍCTIMA DE MÁS DE UN HECHO DELICTIVO, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)

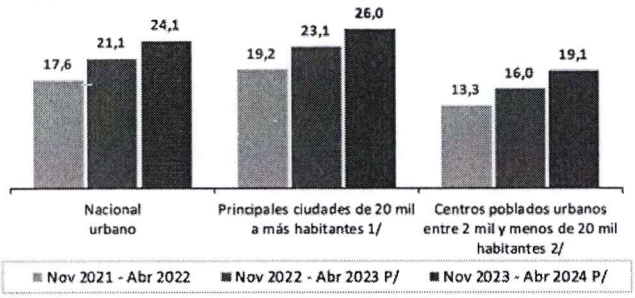


1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO CONSUMADO, POR ÁMBITO DE ESTUDIO

Se define como "hecho delictivo consumado" el conjunto de delitos efectivamente ocurridos que afectan a la población, tales como: robo de dinero, cartera o celular; robo de vehículo (auto, camioneta, autopartes, mototaxi, motocicleta o bicicleta); amenazas, intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico a miembros del hogar, ofensas sexuales, secuestro, extorsión, estafa, robo de negocio o delitos informáticos, en los últimos doce meses antes de la entrevista. A nivel nacional en áreas urbanas, el 24,1% de la población de 15 años y más fue víctima de algún delito consumado. Comparado con los periodos de noviembre 2021 a abril 2022 y noviembre 2022 a abril 2023, esta cifra subió 6,5 y 3,0 puntos porcentuales, respectivamente. En las principales ciudades con más de 20 mil habitantes, el 26,0% de la población reportó haber sido víctima de un delito consumado, mientras que en centros poblados urbanos de entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, este porcentaje fue del 19,1%.

POBLACIÓN URBANA DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO CONSUMADO, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

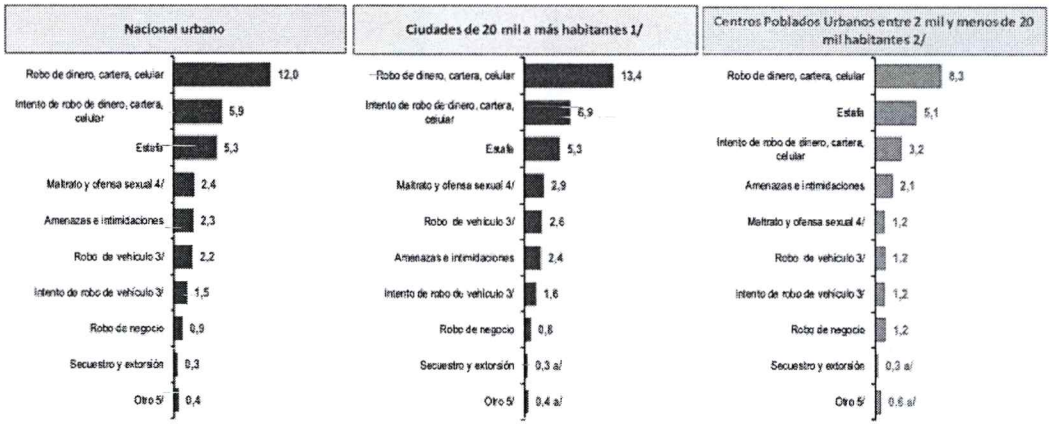
TASA DE VÍCTIMAS POR TIPO DE HECHO DELICTIVO

La tasa de víctimas de delitos se calcula tomando en cuenta la cantidad de personas afectadas en relación con el total de la población urbana de 15 años o más.

Durante el semestre en análisis, a nivel nacional urbano, se estima que 12 de cada 100 personas de 15 años o más fueron víctimas de robo de dinero, cartera o celular. En las principales ciudades de más de 20 mil habitantes, esta cifra aumenta a 13 de cada 100 personas, mientras que en centros urbanos más pequeños, entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, 8 de cada 100 personas fueron afectadas por el mismo tipo de delito.

En cuanto al intento de robo de dinero, cartera o celular, a nivel nacional urbano, 6 de cada 100 personas de 15 años o más fueron víctimas de intento de robo. En las principales ciudades de más de 20 mil habitantes, esta proporción se eleva a 7 de cada 100 habitantes.

TASA DE VÍCTIMAS POR TIPO DE HECHO DELICTIVO, SEGÚN ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024 P/
(Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
3/ Comprende: Auto, camioneta, autopartes de vehículo automotor, motocicleta, mototaxi y bicicleta.
4/ Incluye: Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, acoso, abuso, violación, entre otros.
5/ Comprende: Robo de mascota, maltrato físico de otra persona no miembro del hogar, entre otros.
P/ Resultados preliminares.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

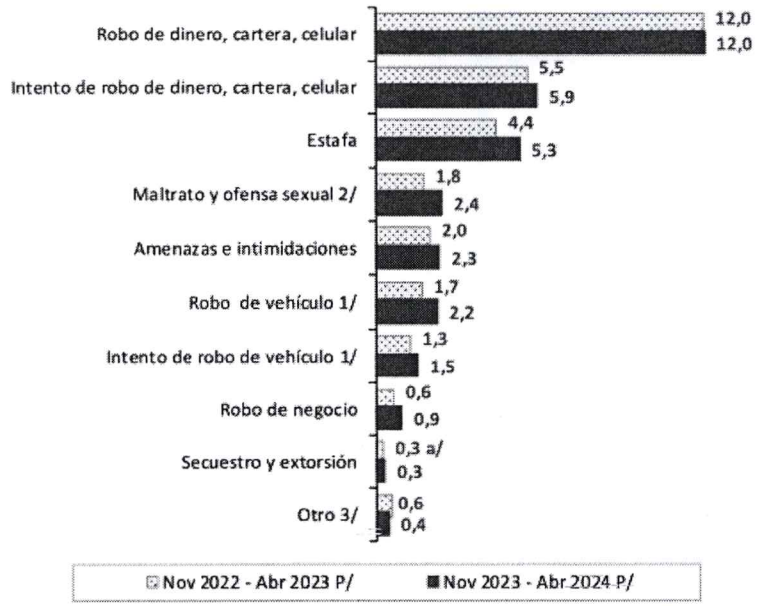
TASA DE VÍCTIMAS POR TIPO DE HECHO DELICTIVO

En el ámbito urbano nacional, el delito con mayor impacto en la población de 15 años o más es el robo de dinero, cartera o celular, con una incidencia de 12 víctimas por cada 100 habitantes. Le sigue el intento de robo de estos mismos bienes, con 6 víctimas por cada 100 habitantes.

Al comparar con el mismo semestre móvil de noviembre 2021 – abril 2022, se observa un aumento significativo en las tasas de víctimas de ambos delitos, posicionándolos como los delitos con mayor incremento en ese periodo.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

TASA DE VICTIMAS DEL AREA URBANA, POR TIPO DE HECHO DELICTIVO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad)



1/ Comprende: Auto, camioneta, autopartes de vehículo automotor, motocicleta, mototaxi y bicicleta.
2/ Incluye: Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, acoso, abuso, violación, entre otros.
3/ Comprende: Robo de mascota, maltrato físico de otra persona no miembro del hogar, entre otros.
P/ Resultados preliminares.
a/ El resultado es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presenta un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

TASA DE VÍCTIMAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE 20 MIL O MÁS HABITANTES

En las principales ciudades con una población de 20 mil habitantes o más, el robo de dinero, cartera o celular es el delito con mayor incidencia entre personas de 15 años o más, afectando a 13 de cada 100 personas. El segundo delito más frecuente es el intento de robo de estos mismos bienes, con una tasa de 7 víctimas por cada 100 personas en este grupo poblacional.

TASA DE VÍCTIMAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE 20 MIL A MÁS HABITANTES, POR TIPO DE HECHO DELICTIVO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad)



1/ Comprende: Auto, camioneta, autopartes de vehículo automotor, motocicleta, mototaxi y bicicleta.
2/ Incluye: Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, acoso, abuso, violación, entre otros.
3/ Comprende: Robo de mascota, maltrato físico de otra persona no miembro del hogar, entre otros.
P/ Resultados preliminares.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

TASA DE VÍCTIMAS EN CENTROS POBLADOS URBANOS ENTRE 2 MIL Y MENOS DE 20 MIL HABITANTES

En los centros poblados urbanos con poblaciones entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, que incluyen tanto capitales de distrito como ciudades con más de 20 mil habitantes que no forman parte del grupo de ciudades priorizadas, se observa que 8 de cada 100 personas de 15 años o más han sido víctimas de robo de dinero, cartera o celular. Le sigue el delito de estafa, con una incidencia de 5 víctimas por cada 100 personas en este grupo.

TASA DE VÍCTIMAS EN CENTROS POBLADOS URBANOS ENTRE 2 MIL Y MENOS DE 20 MIL HABITANTES, POR TIPO DE HECHO DELICTIVO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad)



1/ Comprende: Auto, camioneta, autopartes de vehículo automotor, motocicleta, mototaxi y bicicleta.
2/ Incluye: Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, acoso, abuso, violación, entre otros.
3/ Comprende: Robo de mascota, maltrato físico de otra persona no miembro del hogar.
P/ Resultados preliminares.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

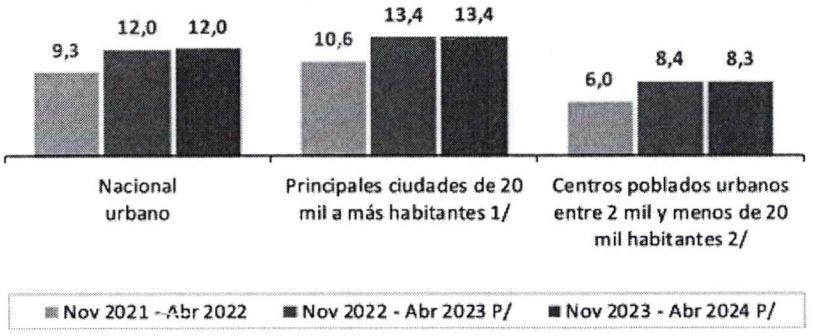
Población Víctima de Robo de Dinero, Cartera y Celular por Ámbito de Estudio

A nivel nacional urbano, 12 de cada 100 personas han sido víctimas de robo de dinero, cartera o celular. En las principales ciudades de 20 mil o más habitantes, esta tasa sube a 13 por cada 100 personas, mientras que en los centros poblados urbanos con poblaciones entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, la tasa es de 8 por cada 100 habitantes.

En todos los ámbitos analizados, la tasa de víctimas de robo de dinero, cartera y celular ha mostrado un incremento en comparación con el semestre móvil de noviembre 2021 a abril 2022.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ROBO DE DINERO, CARTERA, CELULAR, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad)

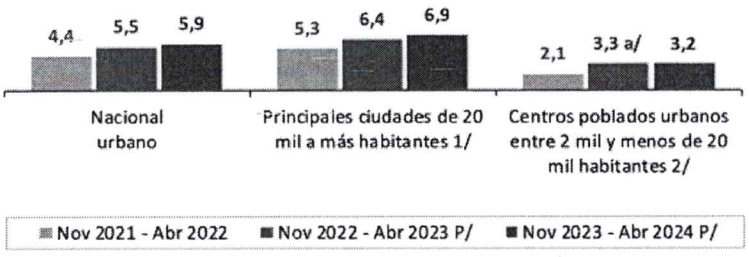


1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

POBLACIÓN VÍCTIMA DE INTENTO DE ROBO DE DINERO, CARTERA, CELULAR POR ÁMBITO DE ESTUDIO

A nivel nacional urbano, 6 de cada 100 personas fueron víctimas de intento de robo de dinero, cartera o celular. En las principales ciudades de 20 mil o más habitantes, esta tasa aumenta a 7 por cada 100 personas. En comparación con el semestre móvil de noviembre 2021 a abril 2022, la tasa de víctimas de intento de robo de dinero, cartera y celular también ha mostrado un incremento en todos los ámbitos analizados, incluyendo las principales ciudades de 20 mil o más habitantes y los centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes.

POBLACIÓN VÍCTIMA DE INTENTO DE ROBO, DINERO, CARTERA, CELULAR, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
a/ El resultado es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presenta un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

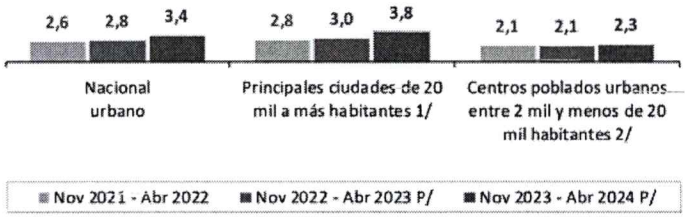
POBLACIÓN VÍCTIMA DE ROBO O INTENTO DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR O AUTOPARTES, POR ÁMBITO DE ESTUDIO

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

A nivel nacional urbano, 3 de cada 100 personas fueron víctimas de robo o intento de robo de vehículo automotor o autopartes. En las principales ciudades con 20 mil o más habitantes, esta tasa se incrementa a 4 por cada 100 personas, mientras que en los centros poblados urbanos de entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, es de 2 por cada 100 personas.

Además, en comparación con los semestres móviles de noviembre 2021 – abril 2022 y noviembre 2022 – abril 2023, tanto a nivel nacional como en las principales ciudades de 20 mil o más habitantes, la tasa de víctimas de robo o intento de robo de vehículos automotores o autopartes ha aumentado.

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ROBO O INTENTO DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR O AUTOPARTES, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales-ENAPRES

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, AUTOPARTES, MOTOTAXI, MOTOCICLETA Y BICICLETA, POR ÁMBITO DE ESTUDIO

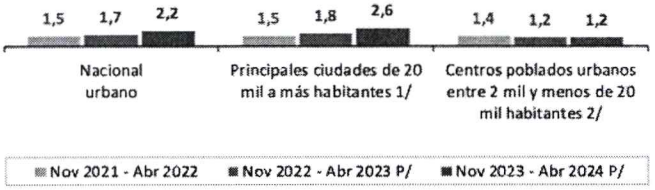
A nivel nacional, en las zonas urbanas, 2 de cada 100 personas fueron víctimas de robo de vehículos automotores, autopartes, mototaxis, motocicletas y bicicletas. En las principales ciudades con más de 20 mil habitantes, la cifra ascendió a 3 por cada 100 personas.

Por otro lado, en los centros poblados urbanos con una población entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, la tasa fue de 1 por cada 100 personas afectadas.

Además, tanto a nivel nacional como en las principales ciudades con más de 20 mil habitantes, la tasa de víctimas de robos de estos objetos aumentó en comparación con el mismo semestre móvil de noviembre de 2021 a abril de 2022.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, AUTOPARTES, MOTOTAXI, MOTOCICLETA Y BICICLETA, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad)



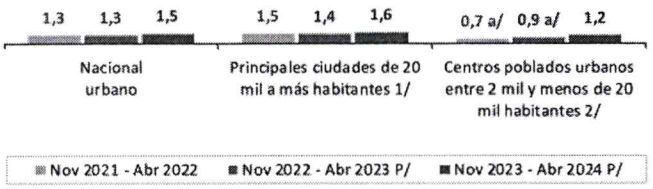
1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES

POBLACIÓN VÍCTIMA DE INTENTO DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, AUTOPARTES, MOTOTAXI, MOTOCICLETA Y BICICLETA, POR ÁMBITO DE ESTUDIO

A nivel nacional, en las zonas urbanas y en las principales ciudades con más de 20 mil habitantes, 2 de cada 100 personas de 15 años y más fueron víctimas de intento de robo de vehículo automotor, autopartes, mototaxis, motocicletas y bicicletas. En los centros poblados urbanos con entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, la tasa fue de 1 por cada 100 personas.

En comparación con el semestre móvil de noviembre de 2021 a abril de 2022, la tasa de víctimas de intento de robo aumentó en las principales ciudades y a nivel nacional. En el caso de las principales ciudades de 20 mil o más habitantes, el aumento fue de 0.1 puntos, mientras que en los centros poblados urbanos de entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, la diferencia fue de 0.5 puntos. A nivel nacional, la tasa de víctimas subió 0.2 puntos respecto a ese periodo.

POBLACIÓN VÍCTIMA DE INTENTO DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, AUTOPARTES, MOTOTAXI, MOTOCICLETA Y BICICLETA, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

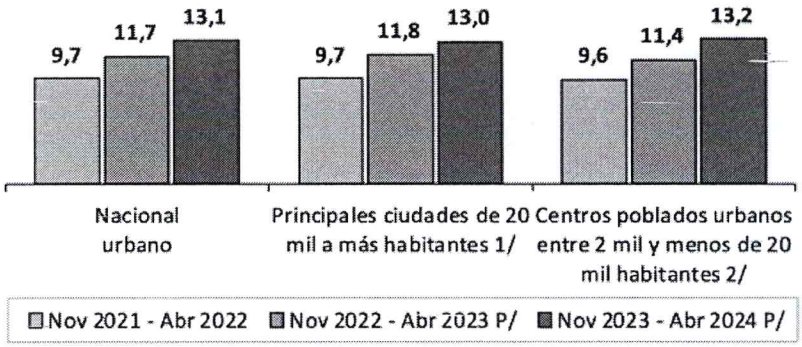
VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO O INTENTO DE ROBO, POR ÁMBITO DE ESTUDIO

En el semestre móvil de noviembre de 2023 a abril de 2024, el 13,1% de las viviendas en el área urbana a nivel nacional fueron afectadas por robo o intento de robo. En las principales ciudades con más de 20 mil habitantes, el porcentaje de viviendas afectadas fue del 13,0%,

mientras que en los centros poblados urbanos con entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, la cifra fue del 13,2%.

Además, se observó un aumento en el porcentaje de viviendas afectadas por robo o intento de robo en todos los ámbitos de estudio, en comparación con los semestres móviles de noviembre de 2021 a abril de 2022 y de noviembre de 2022 a abril de 2023.

VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO O INTENTO DE ROBO, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

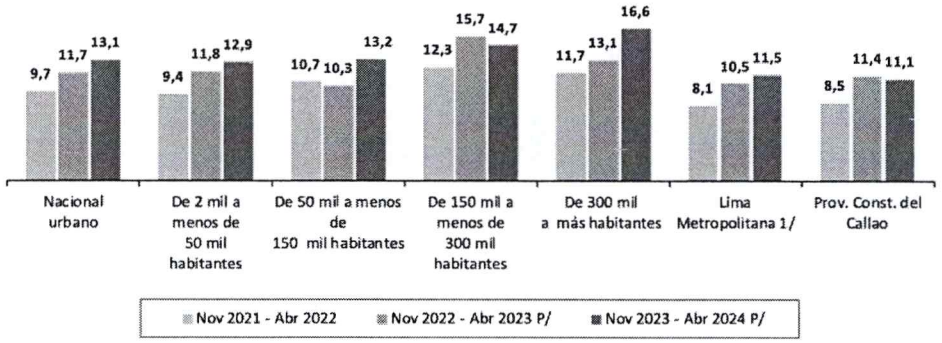
VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO O INTENTO DE ROBO, SEGÚN EL TAMAÑO DE LOS CENTROS POBLADOS URBANOS

En los centros poblados con más de 300,000 habitantes se registra el mayor porcentaje de viviendas afectadas por robo o intento de robo, con un 16.6%. A continuación, se encuentran los centros poblados con una población de entre 150,000 y menos de 300,000 habitantes, con un 14.7% de viviendas afectadas.

Al comparar con el semestre móvil de noviembre de 2021 a abril de 2022, la tasa de viviendas afectadas por robo o intento de robo aumentó en todos los centros poblados. Los mayores incrementos se observaron en los centros poblados con más de 300,000 habitantes, con un aumento del 4.9%, y en aquellos con una población de entre 2,000 y menos de 50,000 habitantes, que experimentaron un aumento del 3.5%.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO O INTENTO DE ROBO, POR TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS URBANOS
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)

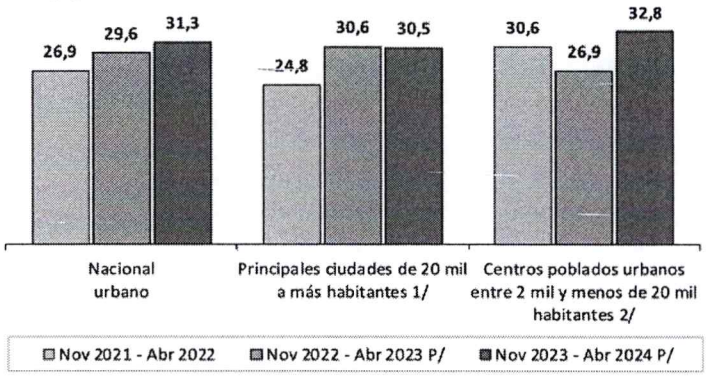


1/ Comprende los 43 distritos de la Provincia de Lima.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO EN MÁS DE UNA OCASIÓN, SEGÚN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

De acuerdo con los resultados del semestre en análisis, se observa que, del total de viviendas afectadas por robo a nivel urbano nacional, el 31.3% experimentaron más de un robo. En las principales ciudades con 20,000 o más habitantes, el porcentaje de viviendas afectadas por robo más de una vez fue del 30.5%. Por otro lado, en los centros poblados urbanos con una población de entre 2,000 y menos de 20,000 habitantes, el 32.8% de las viviendas fueron víctimas de este delito en múltiples ocasiones.

VIVIENDAS AFECTADAS QUE SUFRIERON ROBO MÁS DE UNA VEZ, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



Nota: Para el cálculo del indicador, se han considerado en el numerador aquellas viviendas que han sido afectadas por robo 2 o más veces, mientras que en el denominador al total de viviendas afectadas por este hecho delictivo.
1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

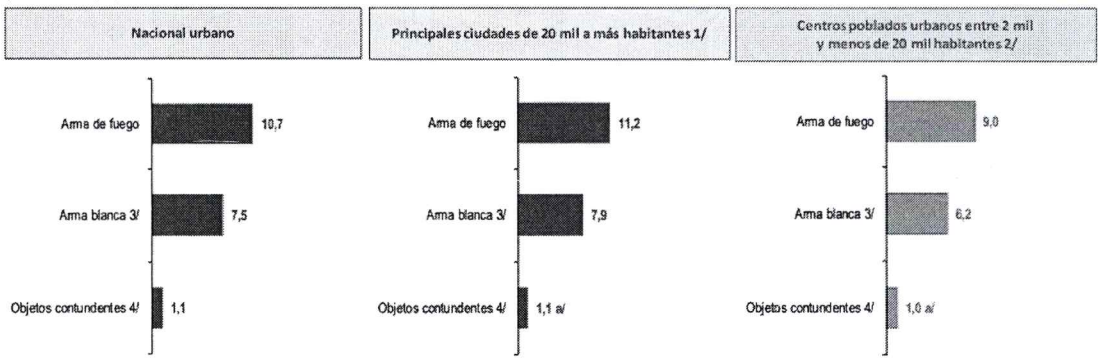
POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, SEGÚN TIPO DE ARMA UTILIZADA POR EL AGRESOR

En el semestre móvil de noviembre de 2023 a abril de 2024, a nivel nacional urbano, el 10.7% de la población de 15 años o más fue víctima de un hecho delictivo cometido con arma de

fuego. En las principales ciudades con 20,000 o más habitantes, este porcentaje ascendió al 11.2%.

A nivel nacional y en las principales ciudades con una población de 20,000 o más habitantes, el 7.5% y el 7.9%, respectivamente, de la población de 15 años o más fue víctima de hechos delictivos cometidos con arma blanca.

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO COMETIDO CON ALGÚN TIPO DE ARMA, SEGÚN ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024 P/
(Porcentaje)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
3/ Comprende: cuchillos, objetos punzocortantes.
4/ Comprende: palos, piedras, etc.
P/ Resultados preliminares.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

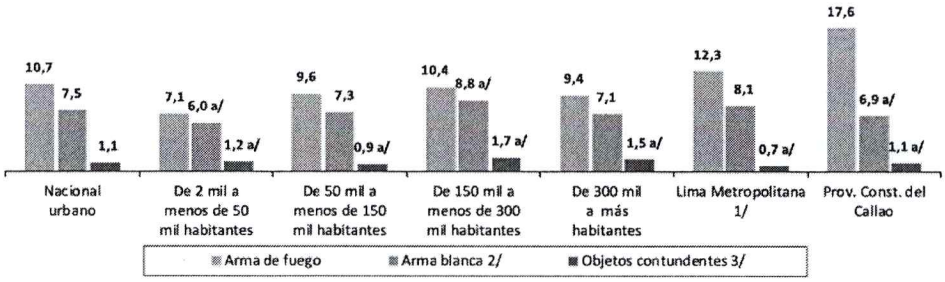
POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, SEGÚN TIPO DE ARMA UTILIZADA POR EL AGRESOR, SEGÚN TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS URBANOS

A nivel de centros poblados urbanos, la población víctima de un hecho delictivo cometido con arma de fuego fue mayor en la Provincia Constitucional del Callao, con un 17.6%, seguida de Lima Metropolitana, con un 12.3%.

En cuanto a los hechos delictivos cometidos con arma blanca, los resultados más destacados se dieron en Lima Metropolitana y en los centros poblados con una población de entre 50,000 y menos de 150,000 habitantes, con un 8.1% y un 7.3%, respectivamente.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO COMETIDO CON ALGÚN TIPO DE ARMA, SEGÚN TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS URBANOS
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024 P/
(Porcentaje)



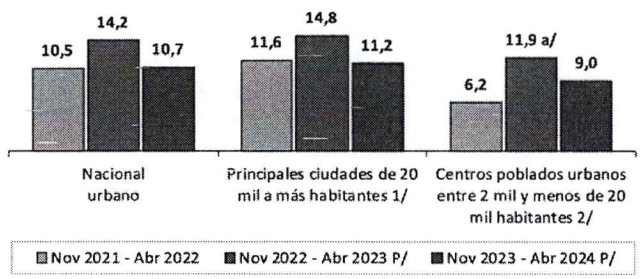
1/ Comprende los 43 distritos de la Provincia de Lima.
2/ Comprende: cuchillos, objetos punzocortantes.
3/ Comprende: palos, piedras, etc.
P/ Resultados preliminares.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO COMETIDO CON ARMA DE FUEGO, SEGÚN ÁMBITO DE ESTUDIO

A nivel nacional urbano, el 10.7% de la población fue víctima de un hecho delictivo cometido con arma de fuego, mientras que en las principales ciudades con 20,000 o más habitantes, este porcentaje alcanzó el 11.2%.

En comparación con el semestre móvil de noviembre de 2022 a abril de 2023, la población víctima de un hecho delictivo con arma de fuego disminuyó en 3.5 puntos porcentuales a nivel nacional urbano, y en las principales ciudades con 20,000 o más habitantes, la disminución fue de 3.6 puntos porcentuales.

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO COMETIDO CON ARMA DE FUEGO, POR ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
a/ El resultado es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presenta un coeficiente de variación mayor al 15%.
P/ Resultados preliminares para el año 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

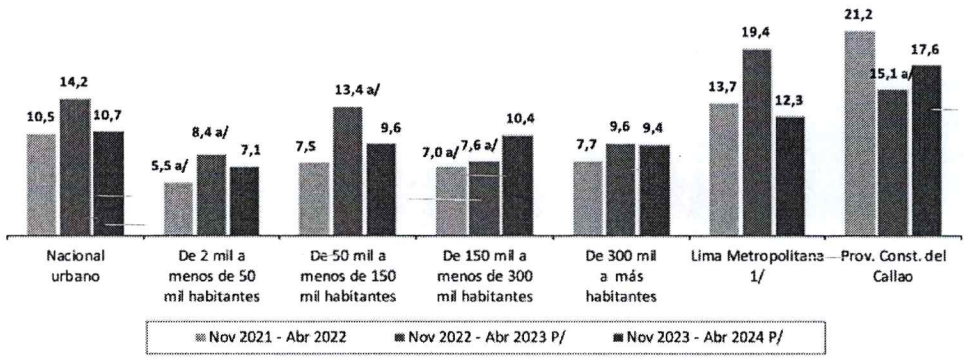
POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO CON ARMA DE FUEGO, SEGÚN TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS URBANOS

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

En la Provincia Constitucional del Callao, el 17.6% de la población de 15 años o más fue víctima de un hecho delictivo cometido con arma de fuego, mientras que en Lima Metropolitana, este porcentaje fue del 12.3%.

Al comparar con el semestre móvil de noviembre de 2022 a abril de 2023, la población víctima de hechos delictivos con arma de fuego disminuyó en 7.1 puntos porcentuales en Lima Metropolitana.

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO COMETIDO CON ARMA DE FUEGO, POR TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS URBANOS
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



1/ Comprende los 43 distritos de la Provincia de Lima.
P/ Resultados preliminares para el año 2023 y 2024.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO QUE REALIZÓ LA DENUNCIA

En esta investigación, se entiende por denuncia la manifestación de una persona ante la Policía Nacional del Perú (comisaría), el Ministerio Público (Fiscalía), o alguna autoridad facultada para ello (teniente gobernador, juez de paz letrado, ronda campesina, entre otros), sobre un hecho que se considera delictivo. Para que se considere que se realizó la denuncia, debe quedar registrada en el cuaderno de ocurrencias, un atestado policial o un acta oficial.

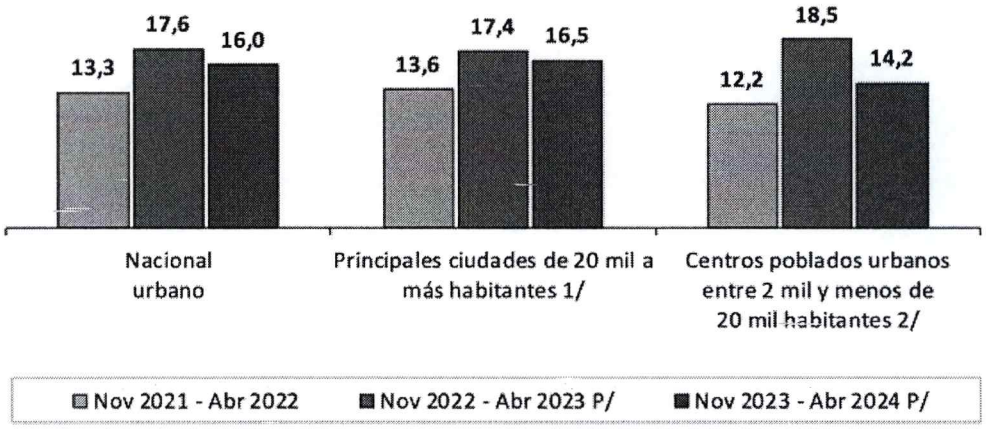
Según los resultados del semestre en análisis, a nivel nacional urbano, el 16.0% de la población urbana de 15 años o más víctima de algún hecho delictivo presentó la denuncia. En comparación con el semestre móvil de noviembre de 2022 a abril de 2023, la población víctima que realizó la denuncia disminuyó en 1.6 puntos porcentuales.

En las principales ciudades con 20,000 o más habitantes, el 16.5% de la población realizó la denuncia, mientras que en los centros poblados urbanos con una población de entre 2,000 y menos de 20,000 habitantes, el 14.2% lo hizo.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, QUE REALIZÓ LA DENUNCIA, POR ÁMBITO DE ESTUDIO

Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



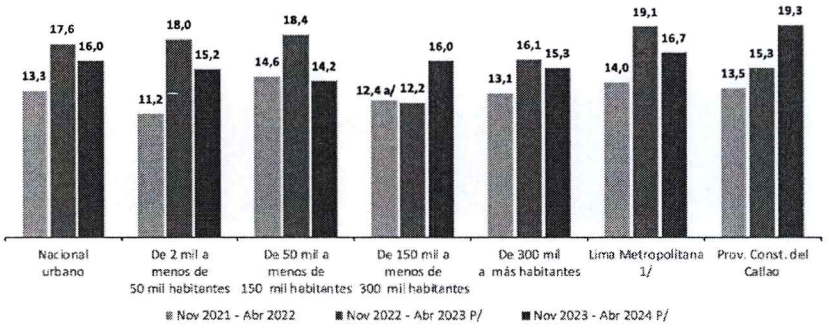
1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO QUE REALIZÓ LA DENUNCIA, POR TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS URBANOS

En la Provincia Constitucional del Callao, el 19.3% de la población de 15 años o más que fue víctima de algún hecho delictivo presentó la denuncia, seguida por Lima Metropolitana con un 16.7%, y los centros poblados con una población de entre 150,000 y menos de 300,000 habitantes, con un 16.0%.

Al comparar con el semestre móvil de noviembre de 2022 a abril de 2023, los centros poblados con una población de 150,000 a menos de 300,000 habitantes mostraron el mayor aumento en la proporción de denuncias, con un incremento de 3.8 puntos porcentuales.

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, QUE REALIZÓ LA DENUNCIA, POR TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS URBANOS
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



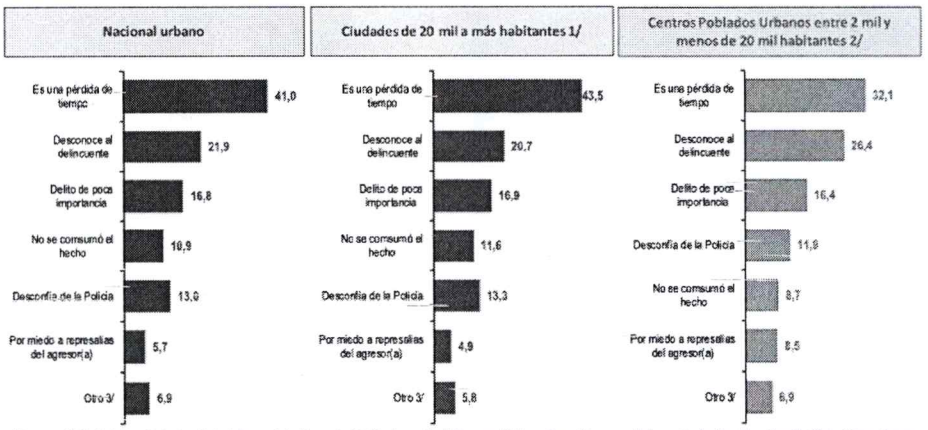
1/ Comprende los 43 distritos de la Provincia de Lima.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
a/ El resultado es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presenta un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, POR MOTIVO DE LA NO DENUNCIA, SEGÚN ÁMBITO DE ESTUDIO

A nivel nacional urbano, en las principales ciudades con 20,000 o más habitantes, así como en los centros poblados urbanos con una población de entre 2,000 y menos de 20,000 habitantes, los principales motivos por los cuales la población no denuncia un hecho delictivo son: "Es una pérdida de tiempo", "Desconoce al delincuente" y "Delito de poca importancia".

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO DELICTIVO, POR MOTIVO DE LA NO DENUNCIA, SEGÚN ÁMBITO DE ESTUDIO
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024 P/
(Porcentaje)



1/ Comprende 28 ciudades principales: 24 ciudades capitales (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba y Lima Metropolitana (43 distritos de la Provincia de Lima) y las ciudades de Chimbote, Juliaca, Moyobamba y la Provincia Constitucional del Callao.
2/ Comprende centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes considerándose también capitales de distritos y ciudades que teniendo más de 20 mil habitantes no se encuentran en el grupo de ciudades priorizadas.
3/ Comprende: Recuperó sus bienes por cuenta propia, falta de pruebas y conocía al delincuente
P/ Resultados preliminares.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE 20,000 O MÁS HABITANTES, VÍCTIMAS DE ROBO DE DINERO, CARTERA, CELULAR, POR MOTIVO DE LA NO DENUNCIA

En las principales ciudades con 20,000 o más habitantes, los principales motivos por los cuales la población no denuncia el robo de dinero, cartera o celular son: "Es una pérdida de tiempo" (51.9%) y "Desconoce al delincuente" (16.0%). En comparación con el semestre móvil de noviembre de 2022 a abril de 2023, el motivo "Desconfía de la Policía" experimentó un aumento de 2.9 puntos porcentuales.

POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE 20 MIL A MÁS HABITANTES, VÍCTIMAS DE ROBO DE DINERO, CARTERA, CELULAR, POR MOTIVO DE LA NO DENUNCIA
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



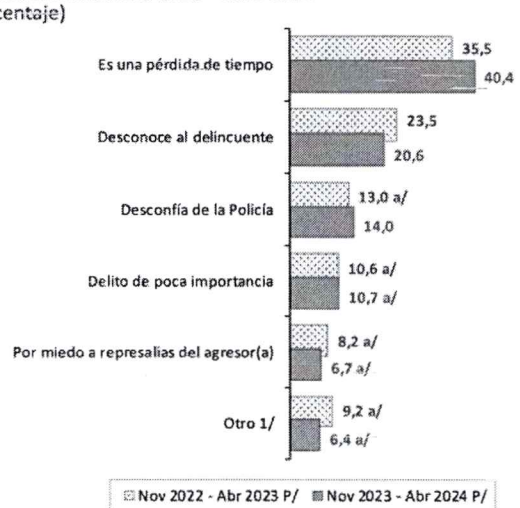
1/ Comprende: Recuperó sus bienes por cuenta propia, falta de pruebas, conocía al delincuente.
P/ Resultados preliminares.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

POBLACIÓN DE CENTROS POBLADOS URBANOS ENTRE 2,000 Y MENOS DE 20,000 HABITANTES, VÍCTIMAS DE ROBO DE DINERO, CARTERA, CELULAR, POR MOTIVO DE LA NO DENUNCIA

En los centros poblados urbanos de entre 2,000 y menos de 20,000 habitantes, los principales motivos por los cuales la población no denuncia el robo de dinero, cartera o celular son: "Es una pérdida de tiempo" (40.4%) y "Desconoce al delincuente" (20.6%).

En comparación con el semestre móvil similar de noviembre de 2022 a abril de 2023, el motivo "Es una pérdida de tiempo" aumentó en 4.9 puntos porcentuales, mientras que el motivo "Desconoce al delincuente" disminuyó en 2.9 puntos porcentuales.

POBLACIÓN DE CENTROS POBLADOS URBANOS ENTRE 2 MIL Y MENOS DE 20 MIL HABITANTES, VÍCTIMAS DE ROBO DE DINERO, CARTERA, CELULAR, POR MOTIVO DE LA NO DENUNCIA
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



1/ Comprende: Recuperó sus bienes por cuenta propia, falta de pruebas, conocía al delincuente.
P/ Resultados preliminares.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

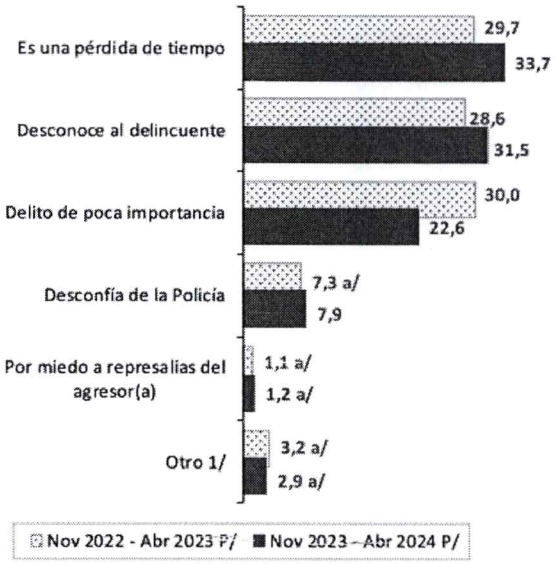
POBLACIÓN VÍCTIMA DE ESTAFA, POR MOTIVO DE LA NO DENUNCIA

Los principales motivos por los cuales la población no denuncia una estafa son: "Es una pérdida de tiempo" (33,7%), seguido de "Desconoce al delincuente" (31,5%) y "Delito de poca importancia" (22,6%).

En comparación con el semestre similar de noviembre de 2022 a abril de 2023, el motivo "Es una pérdida de tiempo" aumentó en 4,0 puntos porcentuales, mientras que el motivo "Delito de poca importancia" disminuyó en 7,4 puntos porcentuales.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN VÍCTIMA DE ESTAFA, POR MOTIVO DE LA NO DENUNCIA
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



1/ Comprende: Falta de tiempo, falta de pruebas, conocía al delincuente y desconoce que tenía que denunciar.
P/ Resultados preliminares.
a/ Los resultados son considerados referenciales porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente y presentan un coeficiente de variación mayor al 15%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

VIGILANCIA DEL SERENAZGO, POR TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS URBANOS

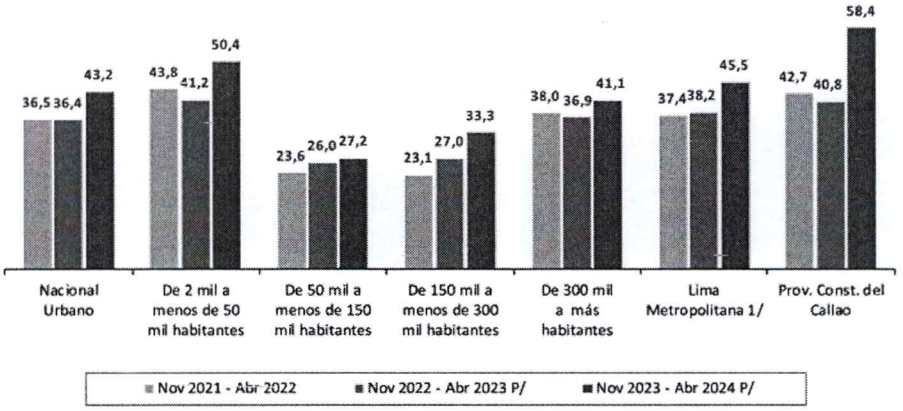
La población que cuenta con vigilancia de Serenazgo en su zona o barrio presenta los siguientes porcentajes según el tamaño de los centros poblados urbanos:

- Provincia Constitucional del Callao: 58,4%
- Centros poblados de 2 mil a menos de 50 mil habitantes: 50,4%
- Lima Metropolitana: 45,5%
- Centros poblados urbanos de 300 mil a más habitantes: 41,1%
- Centros poblados de 150 mil a menos de 300 mil habitantes: 33,3%
- Centros poblados de 50 mil a menos de 150 mil habitantes: 27,2%

Al comparar con el semestre similar de noviembre 2022 - abril 2023, la población que cuenta con vigilancia de Serenazgo en su zona o barrio se incrementó en 17,6 puntos porcentuales en la Provincia Constitucional del Callao.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, CON EXISTENCIA DE VIGILANCIA DEL SERENAZGO EN SU ZONA O BARRIO, POR TAMAÑO DE CENTROS POBLADOS URBANOS
Semestre: Noviembre 2023 – Abril 2024
(Porcentaje)



1/ Comprende los 43 distritos de la Provincia de Lima.
P/ Resultados preliminares para los años 2023 y 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas

➢ PROBLEMÁTICA O JUSTIFICACIÓN

La problemática que aborda esta iniciativa legislativa radica en el impacto del crimen organizado en la seguridad ciudadana y la dificultad de obtener denuncias por parte de ciudadanos temerosos de represalias. La violencia y poder de intimidación de las organizaciones criminales han generado un ambiente de miedo y desconfianza, lo que impide que la ciudadanía colabore en investigaciones que involucran armas, explosivos y otras actividades ilegales de alto riesgo. Este vacío de información limita seriamente la efectividad de las autoridades en desarticular redes criminales, las cuales operan con una estructura jerárquica y estratégica que les permite evitar y manipular la justicia.

La justificación de esta iniciativa legislativa radica en su enfoque en recompensar y proteger a los ciudadanos que denuncien estos actos, ofreciendo incentivos que disminuyan los riesgos percibidos y fomenten la participación. El modelo de recompensa busca, en primer lugar, contrarrestar el poder de coacción de las organizaciones criminales, proporcionando al denunciante un beneficio económico que compense el riesgo asumido. Al establecer un sistema de recompensas gestionado por el Ministerio del Interior, la iniciativa legislativa garantiza una adecuada evaluación de la relevancia y precisión de la información, fortaleciendo la calidad de las pruebas que las autoridades obtienen y optimizando los recursos dedicados a la lucha contra el crimen organizado.

Otro elemento fundamental es la exoneración o exención de penas, que se limita a aquellos colaboradores que no hayan cometido delitos graves y que presenten información veraz antes de ser procesados. Esta medida incentiva la colaboración de individuos que, aunque puedan estar vinculados marginalmente a redes delictivas, buscan desvincularse y contribuir a la justicia. La exoneración premial no solo permite acceder a datos internos de las organizaciones criminales, sino que también es un mecanismo efectivo para disuadir a los miembros de seguir vinculados al crimen, fortaleciendo la capacidad del Estado para socavar y desarticular la base de estas redes.

Además, la protección del anonimato y la seguridad de los informantes responde a la necesidad de garantizar la integridad física y psicológica de quienes colaboran. Este

aspecto es fundamental en una estrategia de lucha contra el crimen organizado, ya que la amenaza de represalias es una barrera significativa para que los ciudadanos participen en investigaciones y denuncias. Al garantizar medidas de protección y reserva de identidad, la iniciativa legislativa no solo salvaguarda al informante, sino que también promueve una cultura de denuncia, donde los ciudadanos se sientan respaldados por el Estado en su colaboración contra el crimen.

En términos de responsabilidad institucional, esta iniciativa legislativa asigna al Ministerio del Interior y al Ministerio Público la gestión de los procesos de denuncia, asignación de recompensas y protección. Esta coordinación asegura que el sistema cuente con un enfoque integral que responda a los desafíos específicos del crimen organizado. Asimismo, el establecimiento de un plazo de 60 días para reglamentar la iniciativa legislativa asegura una implementación rápida, respondiendo a la urgencia de frenar las operaciones criminales y proteger a la sociedad.

La aprobación de esta iniciativa legislativa no solo es necesaria para ampliar las capacidades del Estado en la persecución penal, sino que también representa un paso fundamental en la reconstrucción de la confianza ciudadana en el sistema de justicia y en la protección que el Estado puede brindar. En conjunto, los incentivos económicos, la protección integral y la exoneración de penas crean un marco sólido que se alinea con principios de justicia penal y seguridad pública, ofreciendo una respuesta integral y urgente al grave problema del crimen organizado.

La problemática que motiva la creación de esta iniciativa legislativa radica en el incremento del crimen organizado en Perú, especialmente en lo relacionado con el tráfico de armas, explosivos y otros elementos de alta peligrosidad. Las organizaciones criminales han logrado estructurar redes sólidas y eficientes debido a la escasez de denuncias ciudadanas, impulsada por el temor a represalias y la desconfianza en la seguridad y protección del informante. Estas condiciones facilitan que las organizaciones delictivas operen con impunidad, afectando el orden público y la seguridad de la ciudadanía.

La justificación de la propuesta legislativa reside en la necesidad urgente de contar con información clave para desarticular estas redes. Al incentivar la denuncia ciudadana mediante recompensas y la garantía de anonimato, se establece un sistema efectivo para obtener información confiable que el Estado puede utilizar para interceptar operaciones criminales, prevenir delitos y aumentar la eficacia en la aplicación de la justicia.

La exoneración de penas para aquellos colaboradores que se presenten voluntariamente, y sin antecedentes en delitos graves, refuerza el componente disuasorio de esta norma, orientada a promover la cooperación de personas involucradas de manera periférica, quienes pueden aportar datos significativos sin representar un riesgo de reincidencia criminal. La implementación rápida de esta iniciativa legislativa, en 60 días, subraya el compromiso estatal para enfrentar el crimen organizado de forma inmediata y coordinada, con el Ministerio del Interior y el Ministerio Público como los organismos responsables de proteger a los informantes y gestionar de manera segura las recompensas.

➢ PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA

La propuesta de solución que plantea esta iniciativa legislativa responde a la creciente necesidad de crear un sistema eficaz de colaboración ciudadana para combatir el crimen organizado en el Perú. Al ofrecer recompensas y protección a quienes denuncien actividades delictivas relacionadas con armas y explosivos, el proyecto aborda de manera directa la falta de denuncias, una de las principales barreras para la lucha contra organizaciones criminales. Incentivar la participación de la ciudadanía en este contexto se basa en la premisa de que, al contar con información confidencial y de primera mano, el Estado puede llevar a cabo investigaciones más rápidas y efectivas que apunten a desarticular redes criminales de alto riesgo.

La garantía de anonimato y protección de identidad es uno de los elementos centrales de esta solución. En un entorno donde el miedo a represalias es común, el anonimato permite a los ciudadanos proporcionar información crítica sin poner en riesgo su seguridad personal ni la de sus familias. Este enfoque disipa la principal barrera que enfrenta la cooperación ciudadana en la lucha contra el crimen organizado y fortalece la confianza en las instituciones estatales. El hecho de que las recompensas sean determinadas por el Ministerio del Interior, en función de la importancia de la información, asegura además un criterio de proporcionalidad que promueve la entrega de datos verdaderamente relevantes, evitando la sobrecarga administrativa y asegurando que solo la información útil sea recompensada.

La propuesta de ley también establece una exoneración de penas para colaboradores que, sin haber cometido delitos graves, deciden aportar información de forma voluntaria y antes de ser procesados. Este beneficio está diseñado para permitir que aquellas personas que forman parte de redes criminales en roles menores o periféricos encuentren una salida legal y colaboren con el Estado, contribuyendo así a desestabilizar la estructura de estas organizaciones desde dentro. El uso de la exoneración como incentivo de colaboración se alinea con principios de derecho penal premial, buscando evitar la reincidencia y debilitar el poder de control de las organizaciones delictivas sobre sus integrantes.

➢ ANALISIS A LA PROPUESTA NORMATIVA SOBRE LA NECESIDAD, VIABILIDAD Y OPORTUNIDAD

La propuesta normativa que incentiva la denuncia ciudadana en casos de armas, explosivos y actividades del crimen organizado es esencial, viable y oportuna en el contexto actual, caracterizado por un aumento de la violencia y el poder de las redes criminales en el país. A continuación, se analiza su necesidad, viabilidad y oportunidad como ley en el sistema jurídico y social.

Necesidad

La iniciativa legislativa responde a una necesidad urgente de combatir el crimen organizado, que opera con una estructura sofisticada y un alto nivel de violencia. La naturaleza de estas organizaciones limita la capacidad de las autoridades para recolectar información interna sin la colaboración de individuos cercanos o involucrados en el entorno criminal. Sin la participación ciudadana, el Estado enfrenta serias limitaciones

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

para identificar y desmantelar estas redes. La ley, al ofrecer recompensas y protección, promueve que aquellos con información crítica se sientan incentivados y respaldados al brindar detalles sobre actividades delictivas.

Además, la propuesta responde a un vacío en el sistema de justicia actual, donde la falta de incentivos y garantías de protección desincentiva la denuncia en un contexto de alto riesgo. Este proyecto de ley, entonces, no solo satisface la necesidad de información precisa y oportuna, sino que también da una respuesta sólida al problema de la impunidad al debilitar las estructuras de poder criminal.

Viabilidad

La viabilidad de la propuesta normativa es alta, ya que está respaldada por mecanismos legales y administrativos existentes que permiten su aplicación práctica. En primer lugar, el marco legal de nuestro país y la Convención de Palermo, ratificada por Perú, avalan el uso de incentivos y medidas de protección para ciudadanos que colaboran con la justicia en la lucha contra el crimen organizado. Este respaldo legal proporciona una base sólida para que el Ministerio del Interior y el Ministerio Público coordinen de manera eficaz la implementación de recompensas y medidas de seguridad.

La asignación de responsabilidades al Ministerio del Interior y al Ministerio Público garantiza la capacidad operativa para administrar denuncias y proteger a los informantes. Estas instituciones ya manejan protocolos de seguridad y pueden expandir estos procedimientos a la protección de informantes en casos de crimen organizado. La normativa propuesta también contempla la exoneración de penas para aquellos colaboradores que no hayan cometido delitos graves, una medida viable dentro del sistema penal y que puede gestionarse mediante acuerdos con el Poder Judicial para aplicar beneficios procesales a cambio de información valiosa.

Oportunidad

La aprobación de esta iniciativa legislativa es oportuna en un momento en que el país enfrenta un contexto de alta criminalidad, con un impacto creciente en la seguridad pública y la percepción de justicia en la población. La propuesta normativa responde a una demanda social urgente: el fortalecimiento de mecanismos que permitan al Estado frenar el avance del crimen organizado y proteger la vida de los ciudadanos. Esta iniciativa legislativa ofrece una respuesta rápida y estratégica al problema, exigiendo que el reglamento se emita en un plazo de 60 días, lo que permite una implementación pronta y con capacidad de respuesta.

El contexto actual de violencia en el país genera una atmósfera en la que la ciudadanía busca formas de involucrarse y proteger su entorno sin exponerse a represalias. Al establecer recompensas y protección inmediata, el Estado genera confianza y puede fomentar una cultura de colaboración que fortalezca la lucha contra el crimen organizado y la percepción de justicia. Este marco legal permite al Estado aprovechar una oportunidad única para movilizar a la sociedad en la erradicación de estas redes criminales.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

➢ ANÁLISIS DE IMPACTOS CUANTITATIVOS Y/O CUALITATIVOS DE LA PROPUESTA NORMATIVA

La propuesta normativa genera impactos tanto cuantitativos como cualitativos que pueden transformar significativamente la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado. Al incentivar la denuncia ciudadana mediante recompensas y garantizar la protección de los informantes, la iniciativa legislativa introduce mecanismos con efectos potenciales en la reducción de la actividad criminal y el fortalecimiento de la seguridad pública.

Impactos Cuantitativos

1. **Aumento en el Número de Denuncias**
   La introducción de recompensas económicas para la denuncia de actividades relacionadas con armas, explosivos y crimen organizado puede llevar a un aumento considerable en el número de denuncias ciudadanas. La expectativa es que al reducir el riesgo de colaborar y ofrecer un incentivo económico, más ciudadanos presenten información relevante. Esto incrementará el volumen de datos disponibles para las investigaciones y facilitará la desarticulación de redes delictivas. Experiencias de otros países con programas similares sugieren que estos incentivos logran un aumento de entre 30% y 50% en el número de denuncias relacionadas con delitos de crimen organizado.

2. **Reducción de la Actividad Criminal**
   La iniciativa legislativa tiene el potencial de disminuir los delitos relacionados con el crimen organizado, al facilitar el acceso a información clave que permita a las autoridades intervenir y desarticular redes delictivas. Esta información puede resultar en un mayor número de intervenciones preventivas y detenciones, reduciendo progresivamente las operaciones de estas organizaciones. Si se logra desarticular el 10% de las redes activas en el primer año de implementación, se podría observar una reducción de actividades ilegales en áreas de tráfico de armas y explosivos.

3. **Asignación de Recursos a Recompensas**
   La viabilidad económica de este modelo depende de una asignación estratégica de recursos para el sistema de recompensas, administrado por el Ministerio del Interior. El presupuesto destinado a las recompensas se calcula en función del volumen y relevancia de las denuncias, y la determinación de su impacto requerirá un monitoreo constante para optimizar los pagos y garantizar que se obtenga información útil sin exceder el gasto público. En promedio, otros sistemas de recompensas han destinado entre 1% y 3% del presupuesto de seguridad a estas recompensas, lo cual podría servir como referencia para esta iniciativa legislativa.

Impactos Cualitativos

1. **Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en el Sistema de Justicia**
   Al ofrecer protección y anonimato a los informantes, la iniciativa legislativa genera una percepción de seguridad y respaldo estatal que puede fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia y en las autoridades de seguridad. La confianza

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

es un elemento fundamental para la denuncia ciudadana en contextos de crimen organizado, ya que los ciudadanos temen represalias. Este respaldo por parte del Estado puede crear un entorno donde los ciudadanos se sientan no solo seguros, sino también responsables de colaborar con la justicia, creando un ciclo de colaboración sostenido.

2. **Cambio en la Dinámica Interna de las Organizaciones Criminales**
   La posibilidad de que algunos miembros puedan obtener exoneración de penas al colaborar antes de ser procesados genera desconfianza y fragmentación en las estructuras internas de las organizaciones criminales. Esto debilita el sentido de cohesión de estas redes, especialmente entre los miembros con menor rango o participación, quienes podrán ver en esta iniciativa legislativa una oportunidad para salir del mundo criminal sin enfrentar consecuencias penales severas. Este efecto disuasivo y fragmentador es fundamental, ya que reduce la lealtad y cohesión que sostienen estas organizaciones.

3. **Fomento de una Cultura de Colaboración Ciudadana en Seguridad**
   La propuesta normativa promueve una cultura de colaboración, al visibilizar y premiar la participación ciudadana en la lucha contra el crimen organizado. La sociedad percibe la importancia de la denuncia como una forma de proteger a la comunidad y contribuir a la justicia. Este cambio cualitativo en la percepción ciudadana hacia el rol de la denuncia en la seguridad pública puede perdurar más allá de los beneficios económicos, creando una ciudadanía más comprometida con la prevención y la denuncia de actividades ilícitas.

4. **Refuerzo de la Capacidad Operativa de las Instituciones**
   Con la responsabilidad asignada al Ministerio del Interior y al Ministerio Público para gestionar denuncias y recompensas, la iniciativa legislativa impacta la operatividad institucional, mejorando la capacidad del Estado para responder eficazmente al crimen organizado. Este fortalecimiento incluye la creación de protocolos específicos para la protección de informantes y el establecimiento de criterios claros para la asignación de recompensas, lo cual puede profesionalizar aún más las investigaciones criminales y la gestión de seguridad pública.

III.- EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La vigencia de esta norma tendría varios efectos significativos en la legislación nacional, consolidando y complementando el marco normativo contra el crimen organizado, fortaleciendo la protección a los informantes y promoviendo la colaboración ciudadana.

Es así, esta iniciativa legislativa ampliaría los mecanismos de cooperación ciudadana en el sistema de justicia penal, al establecer incentivos claros y medidas de protección para las personas que denuncian actividades vinculadas con el crimen organizado. En este sentido, complementa y fortalece las disposiciones de la Ley 30077 contra el Crimen Organizado, que contempla técnicas especiales de investigación, al agregar el incentivo de recompensas y la exoneración de penas para informantes. La combinación de ambas leyes refuerza un

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

marco que protege y potencia el rol del ciudadano en la lucha contra el crimen, y la nueva norma funcionaría en sinergia con los mecanismos procesales ya existentes.

Por otra parte, la norma contribuiría a una actualización en las políticas de protección de testigos e informantes, mejorando el ámbito de protección que brinda el Código Procesal Penal y alineando la legislación nacional con las mejores prácticas internacionales en la protección de informantes en casos de alta criminalidad. Esta mejora responde a las obligaciones de Perú bajo la Convención de Palermo, que alienta a los Estados a promover políticas efectivas de protección para quienes colaboran en investigaciones de crimen organizado.

La norma también fortalece la articulación institucional en materia de seguridad pública, al asignar funciones específicas al Ministerio del Interior y al Ministerio Público en la administración de denuncias y protección de los informantes. Esto refuerza la legislación que regula el funcionamiento de estas entidades y promueve la colaboración interinstitucional, mejorando la eficiencia en la respuesta del Estado ante el crimen organizado y dotando de una mayor responsabilidad en la asignación y gestión de recursos destinados a protección y recompensas.

Es así que, el efecto disuasorio de la norma sobre las redes criminales no solo complementa el objetivo punitivo de la legislación actual, sino que impulsa un enfoque preventivo al socavar la cohesión de estas organizaciones desde dentro. Este aspecto tendría efectos positivos sobre las leyes que regulan la seguridad ciudadana, al promover un contexto normativo más seguro que, mediante la colaboración pública, reduce la violencia y la actividad delictiva, lo cual es un valor añadido para el ordenamiento jurídico nacional.

En conjunto, la vigencia de esta norma no solo refuerza y expande el marco legal existente contra el crimen organizado, sino que también se alinea con compromisos internacionales y fortalece la articulación de las políticas públicas de seguridad, generando un sistema normativo más inclusivo, preventivo y eficaz.

La vigencia de esta norma genera un efecto significativo en la legislación nacional, impactando especialmente en el sistema penal, el proceso de administración de justicia y la legislación sobre seguridad ciudadana. Esta iniciativa legislativa introduce mecanismos novedosos que complementan y fortalecen las disposiciones legales vigentes, alineándolas con prácticas de seguridad moderna y de cooperación ciudadana en la lucha contra el crimen organizado.

El efecto en el Sistema Penal, se introduce una figura de exoneración de penas que actúa como beneficio premial para quienes colaboren voluntariamente con información relevante antes de ser procesados y sin haber cometido delitos graves. Este aspecto de la norma se enmarca en el derecho penal premial, que permite beneficios legales para incentivar la desintegración de redes criminales. La exoneración de penas crea una sinergia con figuras ya existentes en el Código Penal y en la Ley 30077, que regula la criminalidad organizada, al ofrecer beneficios a los colaboradores eficaces. Este sistema estimula la cooperación y

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

prevé la posibilidad de que personas indirectamente vinculadas a delitos organizados puedan obtener beneficios procesales a cambio de información valiosa.

Además, esta iniciativa legislativa refuerza las disposiciones relacionadas con la colaboración eficaz en investigaciones de crimen organizado y establece una conexión con el Código Procesal Penal, al incluir lineamientos de confidencialidad y protocolos de protección de identidad para informantes. Esta interacción entre normas mejora la coherencia y aplicabilidad de las leyes penales y procesales en el contexto de delitos complejos.

La legislación actual cuenta con normativas parciales para la protección de testigos y colaboradores en casos de criminalidad organizada, pero la propuesta de ley amplía este marco al formalizar la protección integral del informante ciudadano. Este efecto fortalece el marco de derechos de seguridad y confidencialidad del informante, garantizando el anonimato y la seguridad de los ciudadanos que decidan colaborar. La norma será una extensión práctica de las disposiciones de protección contenidas en la Ley 30077 y el Código Procesal Penal, estableciendo criterios y protocolos específicos para la salvaguarda de informantes, una medida clave para reducir el riesgo de represalias en casos de crimen organizado.

Asimismo, el Estado se compromete a ofrecer una garantía explícita de anonimato, lo cual establece un efecto disuasivo hacia los criminales y protege el flujo de información. La norma demanda al Ministerio del Interior y al Ministerio Público la aplicación de protocolos de confidencialidad y seguimiento de riesgos, asegurando que las medidas de protección no solo se mantengan durante el proceso de denuncia, sino también después, si el caso lo requiere.

La vigencia de esta iniciativa legislativa tiene un impacto directo en la legislación de seguridad pública, ya que fomenta la cooperación ciudadana como un eje central en la prevención del crimen. La inclusión de recompensas económicas para las denuncias facilita la creación de una cultura de colaboración en materia de seguridad, y al estructurar un sistema de incentivos gestionado por el Ministerio del Interior, se fortalece el marco legal de políticas de seguridad ciudadana. Este enfoque complementa disposiciones de otras leyes sobre seguridad, como las que regulan el uso de agentes encubiertos y técnicas de investigación en la lucha contra el crimen organizado, creando un ecosistema de normas que permiten al Estado responder de manera más eficaz a amenazas de alto impacto social.

La norma establece obligaciones específicas para el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, quienes serán responsables de la administración y gestión de denuncias, recompensas y protección de informantes. Esto implica que estas instituciones deberán adaptar sus estructuras administrativas y operativas para cumplir con los protocolos de recepción, verificación y seguimiento de las denuncias, además de coordinar los mecanismos de seguridad para los informantes. Este aspecto de la propuesta legislativa refuerza la coordinación interinstitucional y optimiza los recursos de ambas instituciones, facilitando un enfoque integral que mejora la respuesta estatal ante la criminalidad organizada.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

La vigencia de la presente iniciativa legislativa marca un precedente en la legislación nacional al establecer un sistema de recompensas para la colaboración ciudadana en el combate a la delincuencia. Este efecto es de gran alcance, pues alienta la participación activa de la población en temas de seguridad, estableciendo una política pública de incentivos económicos que puede extenderse en el futuro a otros ámbitos de la administración de justicia. Al formalizar la cultura de denuncia mediante recompensas, la norma también reduce el miedo a represalias y promueve una ciudadanía más involucrada en la protección de su entorno, alineándose con el objetivo estatal de garantizar la paz y seguridad en el país.

IV.- ANALISIS COSTO – BENEFICIO

El análisis costo-beneficio de la presente propuesta de ley que fomenta la denuncia ciudadana en casos de crimen organizado presenta una serie de ventajas y desafíos. Por un lado, los beneficios son claros: la posibilidad de desarticular organizaciones criminales mediante la colaboración ciudadana, el fortalecimiento del sistema de justicia penal y la mejora de la seguridad pública. La recompensa económica actúa como un incentivo para que las personas se sumen a la lucha contra el crimen, mientras que la exoneración de penas para los informantes colaboradores estimula aún más la cooperación, al ofrecerles una vía para reducir su implicación en delitos menores.

Sin embargo, existen costos asociados. La implementación de un sistema efectivo de recompensas y protección puede requerir recursos significativos del Estado. El diseño y la ejecución de programas de protección a testigos, junto con la administración de recompensas económicas, implican un gasto considerable en términos de seguridad, personal y logística. Además, la determinación de qué información es relevante y veraz puede generar desafíos en cuanto a la gestión de los recursos y la selección de casos.

A pesar de estos costos, los beneficios potenciales en términos de desmantelar redes criminales, mejorar la seguridad pública y fomentar la colaboración ciudadana parecen superar los costos iniciales. La efectividad de la ley dependerá de la correcta implementación y supervisión de los mecanismos de recompensa y protección, así como de una comunicación clara y accesible a la ciudadanía sobre cómo participar en el sistema sin temor a represalias.

V.- VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y EL ACUERDO NACIONAL

La presente iniciativa legislativa se vincula con la agenda legislativa y el Acuerdo Nacional al fortalecer la seguridad pública y el sistema de justicia penal, uno de los pilares fundamentales de la política nacional. La lucha contra el crimen organizado y la promoción de la denuncia ciudadana son prioridades del país, y esta ley refuerza esas metas mediante el fomento de la cooperación de la ciudadanía. Al ofrecer recompensas económicas y la exoneración de penas a los informantes, la ley también se alinea con el objetivo de fomentar la participación activa de la población en la seguridad, un tema central en el Acuerdo Nacional.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284

La protección de la identidad de los informantes contribuye al respeto de los derechos humanos y a la creación de un entorno seguro para la ciudadanía, lo que refuerza el compromiso del Estado con la justicia y la lucha contra la delincuencia organizada. Este enfoque también complementa los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho y la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de velar por su seguridad y bienestar. En esa línea de ideas la presente iniciativa legislativa contenida en el Proyecto de Ley que se presenta, está alineada con los objetivos del **numeral** I. Democracia y estado de derecho, del Acuerdo Nacional y vinculados con las Políticas de Estado en el **numeral** 7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana, y concordante con el **tema** 19. Seguridad ciudadana y civismo de la Agenda Legislativa del Congreso para el período Anual de Sesiones 2021-2022, aprobada por Resolución Legislativa del Congreso N° 002-2021-2022-CR y Resolución Legislativa del Congreso N° 002-2022-2023-CR, Resolución Legislativa del Congreso Nº 002-2023-2024-CR.

Edificio Juan Santos Atahualpa Jr. Ancash y Av. Abancay s/n Ofic. 501 – Lima - Perú Tlfs: (51) 311 7777 – Anexo 7284